

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN**



**SALA LABORAL**  
**Acta N°095**

Medellín, veinticuatro (24) de mayo dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **DIEGO FIDEL MESTRA ARTEAGA** contra **COLPENSIONES**, trámite al que se vinculó la **AEROCIVIL** y **AIRPLAN S.A.S.**

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

**ANTECEDENTES**

**Pretensiones**

El demandante solicita que se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de vejez por alto riesgo; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y en subsidio la indexación de las condenas.

**Hechos**

Como fundamento de sus pretensiones indica que nació el **29 de marzo de 1957**.

Prestó sus servicios a la Aeronáutica Civil desde el 28 de diciembre de 1982 y hasta el 20 agosto de 2008 en el cargo de bombero aeronáutico. Luego, a partir

del 22 de agosto de 2008 y hasta el 24 de abril de 2016, laboró como Teniente Oficial de servicios para **Airplan S.A.S.**

El **3 de octubre de 2012**, el actor solicitó pensión de vejez por alto riesgo, prestación que le fue negada por **Colpensiones** por no cumplir con el requisito de semanas cotizadas.

### **Respuesta Colpensiones**

**Colpensiones** a través de apoderada indicó que son ciertos los hechos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, buena fe, cobro de lo no debido, prescripción e inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

### **Respuesta Aeronáutica Civil**

Esta entidad a través de apoderada dio respuesta a la demandada indicando que es cierto que el demandante fue su empleado y que en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1994 y el 30 de agosto de 2003 se le realizó cotizaciones por alto riesgo, obligación que se suspendió con posterioridad a la vigencia del Decreto 2090 de 2003.

En lo referente a las pretensiones adujo que no debe prosperar ninguna respecto de esa entidad y propuso como excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de obligación del pago de aportes pensionales.

### **Respuesta Airplan S.A.S.**

Esta sociedad por intermedio de apoderado indicó que no le constan los hechos que refieren a situaciones de terceros, expresando en lo referente al contrato que tuvo con el demandante que es cierta, aclarando que no existen conceptos adeudados por la misma en la medida que las actividades desempeñadas no pueden catalogarse como de alto riesgo, toda vez que no existía una exposición constante a altas temperaturas.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, validez del acuerdo de transacción en materia laboral, pago, prescripción, buena fe y compensación.

### **Sentencia de primera instancia**

El Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **8 de marzo de 2023**, absolvió a **Colpensiones** de las pretensiones presentadas en su contra por considerar que no fue acreditado por el demandante que tuviera el número semanas de alto riesgo necesarias para acceder a la prestación reclamada, sin que por demás pueda endilgarse a esta entidad el incumplimiento de un deber de cobro, por cuanto como lo certifica la **Aeronáutica Civil**, los aportes realizados en favor del actor fueron realizados a **Cajanal**.

En lo referente a las vinculadas **Aeronáutica Civil** y **Airplan S.A.S.** destacó que su sentencia no tendría efectos, por cuanto no fueron demandadas en el proceso y en ese sentido no existen pretensiones en su contra, siendo vinculadas al proceso con el fin de que suministraran una información que permitiera establecer si el actor contaba con cotizaciones de alto riesgo.

### **Recurso apelación demandante**

El apoderado del actor solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, por cuanto estando vinculadas en el proceso la **Aeronáutica Civil** y **Airplan S.A.S.** se debió resolver el aspecto que tiene que ver con el pago de cotizaciones por alto riesgo de parte de estos empleadores.

### **Alegatos de conclusión**

Corrido el término de traslado, la apoderada de **Colpensiones** en la que solicitó que se confirme la decisión absolutoria de primera instancia, por cuanto la actividad desarrollada por el demandante solo fue catalogada como de alto riesgo a partir de la vigencia de la Ley 1575 -21 de agosto de 2012- por lo que no es posible contabilizar para este fin periodos anteriores a esta fecha, sin que con los laborados con posterioridad a la misma se satisfagan los requisitos para acceder a la pretensión reclamada.

Por su parte, el apoderado de **Airplan S.A.S.** expresó que no era su obligación efectuar cotizaciones por alto riesgo en la medida que el demandante no estaba expuesto de manera permanente a altas temperaturas, es más la atención de incendios era una actividad excepcionalísima en el día a día de su operación.

Además de lo anterior destaca que la **Resolución 661 de 2014**, emitida por el Ministerio del interior, excluyó de la aplicación de la Ley 1575 a los Bomberos Aeronáuticos concesionados, toda vez que solo hace referencia al cuerpo de

carácter oficial adscritos a la Aeronáutica Civil. Sin el que demandante cumpla con dichas características.

## CONSIDERACIONES

### Problema jurídico

El problema jurídico a resolver en esta segunda instancia conforme con el recurso interpuesto, serán: i) Determinar si la actividad para la que fue contratado el demandante por las demandadas es considerada como una actividad de alto riesgo a efectos de causar una pensión especial de vejez; en caso de que la respuesta a este primer cuestionamiento sea afirmativa se deberá establecer ii) si la falta de cotizaciones por alto riesgo puede ser motivo para negar esta prestación, iii) si procede el reconocimiento y pago de la pensión por alto riesgo y iv) si hay lugar a la condena al pago de los intereses moratorios o la indexación de las condenas.

### Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. El señor **Diego Fidel Mestra Arteaga** nació el **29 de marzo de 1959** (01/pág.9).
2. El actor prestó sus servicios para la **Aeronáutica Civil** entre el 28 de diciembre de 1982 y hasta el 20 de agosto de 2008 en labores de bombero aeronáutico, por las que se efectuó cotizaciones en alto riesgo entre el 30 de enero de 1995 y el 30 de septiembre de 2003 (02/págs.11).
3. El demandante laboró para **Airplan S.A.** entre el **22 de agosto de 2008** y el **24 de abril de 2016** desempeñándose en el cargo de Teniente Oficial de Servicios.
4. El día **3 de octubre de 2012**, el señor **Mestra Arteaga** solicitó la pensión de vejez, prestación que le fue negada mediante la **Resolución GNR 21686 del 4 de marzo de 2013** por no acreditar el requisito mínimo de cotización especial (01/págs.23-24)
5. Esta decisión fue confirmada en la **Resolución VPB 6521 del 5 de mayo de 2014** (01/págs.26-27).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

**La actividad del bombero aeronáutico como actividad cubierta como de alto riesgo a efectos de causar pensión especial de vejez**

El demandante solicita que se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de vejez por alto riesgo teniendo en cuenta que se desempeñó durante toda su vida laboral como bombero aeronáutico.

Para resolver esta pretensión es necesario establecer cuáles son las normatividades que han regido en materia de alto riesgo y determinar si las actividades desempeñadas por el actor como bombero aeronáutico se encuentran dentro del catálogo dispuesto por el legislador.

Para este efecto es necesario recordar que las actividades de alto riesgo son aquellas que por su impacto en las condiciones biológicas de la persona que las desarrolla ocasionan una disminución en su expectativa de vida, por lo que el legislador creó una protección diferencial que les permita disfrutar de la pensión de vejez a una menor edad, permitiendo además que se retiren del ejercicio de esa actividad que tiene la potencialidad de afectar su salud.

En vigencia de la ley 100 de 1993 y con la finalidad de definir las actividades catalogadas como de alto riesgo, el artículo 140, estableció que tratándose de servidores públicos el Gobierno Nacional expediría las actividades que tendrían esta calificación y los puntos adicionales por los que debería cotizar el empleador, mandado que fue cumplido mediante el Decreto 1835 de 1994, norma dentro de la cual se estableció como beneficiarios del régimen de alto riesgo a los Técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo que presten sus servicios para la aeronáutica civil y en los cuerpos de bomberos las personas encargadas de la extinción de incendios.

Esta norma fue derogada por el Decreto 2090 de 2003 en el que se unificaron las actividades de alto riesgo, manteniendo en esta norma como oficios de esta categoría el de los Técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo que presten sus servicios para la aeronáutica civil y las personas que en los cuerpos de bomberos se encarguen de la extinción de incendios.

En este desarrollo normativo se puede observar la existencia de dos criterios, (i) el de la prestación del servicio a un empleador y (ii) el desarrollo de una actividad, siendo necesario entonces delimitar si los bomberos aeronáuticos se

encontraban incluidos dentro de las personas protegidas con este beneficio establecer si pertenecían a algún “cuerpo” y para esta finalidad es necesario recordar que la Ley 322 de 1996 estableció que son cuerpos de bomberos aquellas instituciones organizadas para la prevención y atención de incendios y que pueden ser oficiales cuando son creadas por Concejos distritales o municipales y entidades territoriales indígenas o voluntarios cuando son producto de asociaciones cívicas sin ánimo de lucro.

Como puede evidenciarse tal criterio en el caso de los bomberos aeronáuticos no se cumple pues antes de la vigencia de la Ley 1575 de 2012 no integraban el sistema de gestión integral del riesgo de incendio, conclusión expuesta en sentencia del 20 de noviembre de 2020 con radicación 63001-23-33-000-2017-00269-01(2958-18), en la que la Sección Segunda, Subsección b del Consejo de Estado, en al resolver la demanda de un bombero aeronáutico para que se le aplicará la pensión especial por alto riesgo, expresó:

Así las cosas, es a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1575 de 2012 que se incorporaron a los bomberos aeronáuticos, entre otros, a los Cuerpos de Bomberos de Colombia, momento desde el cual se entiende que su actividad es considerada de alto riesgo y, en consecuencia, susceptible de tratamiento especial.

Ahora, si la procedencia de la prestación se estudiara desde el criterio exposición al riesgo, se encuentra que la certificación expedida por la **Aeronáutica Civil** da cuenta de que dentro de las funciones del demandante estaba la de salvamento de vidas humanas en accidente aéreos y la extinción de incendios, que se produzcan en las aeronaves e instalaciones del aeropuerto de su jurisdicción (01/pag.11), lo que da cuenta que su campo de acción era restringido a situaciones de emergencia que se presentaran en el espacio geográfico del aeropuerto, no existiendo una constante exposición al riesgo como la que prestan sus servicios en cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios.

Este carácter diferencial fue expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-1125 de 2004 en el que declaró constitucional el numeral 5) del artículo 2 del Decreto 2090 de 2003 por el cargo consistente en el desconocimiento del derecho de igualdad al no incluir en su redacción a los bomberos aeronáuticos, oportunidad en que el Alto Tribunal en sus consideraciones destacó que una vez estudiados los eventos en los que se requirió la intervención de bomberos aeronáuticos en conflagraciones se encontró que la misma era de carácter excepcional, por lo que no podía establecerse un trato discriminatorio. En palabras del Alto Tribunal:

Las condiciones adversas a las que se ven enfrentados unos y otros servidores son distintas, no solo en razón de las funciones, que son disímiles, sino por la tensión permanente a la que se ven expuestos. Justamente cuando se pretendió regular de manera concreta las actividades que generan alto riesgo en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil se tuvo en cuenta la que generaba mayor fatiga mental y por contera disminuía la expectativa y calidad de vida, disminución que por lo menos en lo atinente a ese factor no se encuentra latente en la actividad de los bomberos aeronáuticos.

Es más, ha de tenerse en cuenta que ni en el Decreto 1281 de 1994 ni en el Decreto 1835 del mismo año se consideró como actividad de alto riesgo en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil la desarrollada por las personas que prestan sus servicios de salvamento y extinción de incendios. Por manera que no es posible afirmar que las condiciones pensionales han sido desmejoradas.

De otra parte, a juicio del actor se desconoce el principio de igualdad por cuanto el legislador sí incluyó dentro de las actividades de alto riesgo a las personas que cumplen actividades relacionadas con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios en los cuerpos de bomberos, razón por la cual, en su parecer, debió también, al regular lo pertinente en la Aeronáutica Civil, incluir a los bomberos de esa entidad.

Al respecto, considera la Corte que ese criterio no puede ser tenido en cuenta para admitir que ello ataba al legislador y en esa medida estaba obligado a darle el mismo tratamiento al personal de bomberos de la Aeronáutica Civil, en cuanto son actividades que se desarrollan en entidades distintas y que podrían revestir características también diversas, teniendo en cuenta el criterio adoptado para clasificar la actividad como de alto riesgo. Ha de precisarse que el juicio de constitucionalidad que por este aspecto adelanta la Corte se circunscribe al precepto demandado, del que se predica la presunta omisión, y en el cual el criterio adoptado por el legislador para realizar la correspondiente clasificación fue no sólo el funcional sino el orgánico (resaltado propio).

En línea con lo explicado esta Sala concluye que con anterioridad a la vigencia de la Ley 1575 de 2012 no existe un criterio que permita establecer que la actividad desempeñada por el actor como bombero aeronáutico fuera de alto riesgo y en esa medida como quiera que el tiempo laborado entre el 21 de

agosto de 2012 y el 24 de abril de 2016 no resulta equivalente a las 700 semanas de cotización especial exigidas por el Decreto 2090 de 2003 para el reconocimiento pensional, resulta inviable otorgar la prestación según esta norma, por lo que se **confirmará** aunque por razones diferentes la decisión absolutoria de primera instancia.

### **Costas**

Costas en esta instancia a cargo del demandante por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del CGP. Las agencias en esta instancia en favor de la entidad demandada y las vinculadas se fijan en la suma de \$200.000 para cada una.

### **Decisión**

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR**, aunque por razones diferentes la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el día **8 de marzo de 2023**, en el proceso ordinario laboral promovido por el señor **DIEGO FIDEL MESTRA ARTEAGA** contra **COLPENSIONES**, trámite al que se vinculó la **AEROCIVIL** y **AIRPLAN S.A.S.**

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo del demandante. Las agencias en esta instancia en favor de la entidad demandada y las vinculadas se fijan en la suma de \$200.000 para cada una.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

### **LOS MAGISTRADOS**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

Radicado 05001-31-05-016-2018-00030-01  
Radicado Interno: P0692323  
Asunto: Confirma sentencia



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>Proceso</b>	Ordinario
<b>Demandante</b>	Diego Fidel Mestra Arteaga
<b>Demandado (s)</b>	Colpensiones, Aerocivil Y Airplan S.A.S.
<b>Radicado</b>	05001-31-05-016-2018-00030-01
<b>Decisión</b>	Confirma sentencia
<b>Magistrado ponente</b>	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 25 de mayo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 25 de mayo de 2023 a las 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO